Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

**Argentina**

Programa de Apoyo a Reformas de Transparencia e Integridad en Argentina

(AR-L1268)

**Análisis Económico**

**Análisis Económico[[1]](#footnote-1)**

1. **INTRODUCCIÓN**
   1. En el marco de la programación de cartera del Banco con el país para 2017 (Documento de Programa de País, noviembre 2017), el Gobierno de Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (Banco) acordaron un Préstamo Programático de Apoyo a Reformas de Política (PBP), que prevé dos (2) operaciones consecutivas, vinculadas técnicamente entre sí pero financiadas de forma independiente, de **Apoyo a Reformas de Transparencia e Integridad en Argentina**, y en este documento referido, en adelante, como el “**Programa**”. Una primera operación de préstamo (AR-L1268) fue programada, para 2017, por un monto de US$200 millones.
   2. El objetivo del programa es contribuir a la transparencia e integridad de la gestión pública mediante regulaciones y mecanismos que promuevan el acceso a la información. En esta primera operación, se abordarán las siguientes materias: (i) la adopción con rango legal del principio de acceso a la información pública y la conducta ética de los funcionarios públicos; (ii) la gestión de los recursos en obras, contrataciones y personal del Estado; y (iii) la gestión del sector financiero. Para ello el Programa se estructura en **cuatro componentes**:
   3. **Componente I. Estabilidad macroeconómica**. El objetivo de este componente es mantener un contexto macroeconómico congruente con los objetivos del programa según lo establecido en la Matriz de Políticas.
   4. **Componente II. Fortalecimiento del acceso a la información y del marco legal de la ética de los funcionarios públicos**. Este componente agrupa un conjunto de medidas transversales. El objetivo es asegurar un mayor acceso a la información pública, por parte de ciudadanos y actores económicos, y fortalecer la capacidad de los órganos de aplicación de las reglas de desempeño del cargo por parte de los funcionarios públicos. Para ello se propone, como acciones de política de la primera operación:
2. Incorporación al marco legal argentino de un régimen de acceso a la información pública, mediante la promulgación, por parte del Poder Ejecutivo, de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que alcance a la totalidad de los Poderes del Estado Nacional y establezca entes/órganos garantes autónomos que velen por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y promuevan medidas de transparencia activa.

1. Adopción de un plan de apertura de datos gubernamentales, mediante la emisión, por parte del Poder Ejecutivo, del Decreto 117/2016 que instruye a los Ministerios, Secretarías y organismos desconcentrados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional la preparación de dichos planes, en los que se incluirá -además de la información institucional-, la publicación y actualización en el Portal Nacional de Datos Públicos, y las bases de datos referidas a diversos sectores económicos, sociales, culturales y medioambientales, incluida la actualización en el mencionado Portal.
2. Introducción en el ordenamiento penal argentino de la figura del “imputado arrepentido”, mediante la promulgación, por parte del Poder Ejecutivo, de la Ley 27.304, conocida como la “ley del arrepentido”, que modifica el Código Penal; mejorando la probabilidad de acceder a información sobre delitos contra la administración pública, en tanto contribuyendo a un significativo avance en la investigación, o permitiendo dar con autores o coautores del delito, y con la posibilidad de reducción de las escalas penales.
3. Fortalecimiento de la capacidad de registro de los obsequios a funcionarios públicos, mediante la emisión, por parte del Poder Ejecutivo, del Decreto 1179/2016, que establece la reglamentación del artículo 18 de “Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos” de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública No. 25.188 y sus modificaciones, y crea el “Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos”. Tal Registro permitirá que los funcionarios reporten debidamente estas situaciones y que la OA, quien dictará las normas aclaratorias y complementarias para la implementación de la reglamentación mencionada, en los términos que define el Decreto citado para que pueda realizar un adecuado control y seguimiento del destino de estos obsequios.
   1. **Componente III. Fortalecimiento de la transparencia del uso de los recursos públicos**. El objetivo es fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos del Estado en lo referido a la inversión pública (contrataciones de obra pública y compras públicas), y al empleo público. Para ello se propone, como acciones de política de la primera operación:
4. Implementación del sistema de gestión electrónica para las Contrataciones de Obra Pública, Concesiones de Obra Pública y Servicios Públicos y Licencias (CONTRAT.AR), mediante la emisión, por parte del Poder Ejecutivo, del Decreto 1336/2016 que determina la implementación del citado sistema. Tal sistema dotará al Estado de mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los contratos de obra pública y concesión de obra y servicios públicos incluyendo sus fases de licitación, adjudicación, ejecución y evaluación. Este Decreto establece que el Ministerio de Modernización será el administrador del sistema propuesta y que además está facultado para dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la implementación.
5. Facilitar y agilizar la interacción entre el Estado Nacional y los usuarios del sistema de contrataciones, dotando de mayor desarrollo tecnológico al régimen de contrataciones y facilitando el acceso a la información, mediante la emisión, por parte del Poder Ejecutivo, del Decreto 1030/2016 que aprueba la reglamentación del Decreto No. 1023/2001 y sus modificaciones para impulsar el desarrollo tecnológico, incorporar tecnologías de la información y de las comunicaciones, aplicar los principios de solución registral y de ventanilla única, simplificar procedimientos con el objeto de facilitar y agilizar la interacción entre el Estado Nacional y los administrados, propiciar reingenierías de procesos, mejorar la eficiencia, eficacia, calidad y sustentabilidad, luchar contra la corrupción, promover la ética y la transparencia. Esto de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 8 de la Ley No. 24.156 de Administración Financiera y de Órganos de Control, para las entidades del Poder Ejecutivo Nacional, en cuanto a desarrollos tecnológicos en todo lo inherente al régimen de compras; especialmente en cuanto a la presentación de ofertas y al registro de proveedores.
6. Facilitar el control y la transparencia en la gestión de la nómina de personal, con la implementación y puesta en funcionamiento de un único sistema integral de gestión y administración del personal (SARHA), mediante la emisión por parte del Poder Ejecutivo del Decreto 1030/2016, que presta servicios en las entidades y jurisdicciones comprendidas en el inciso (a) del Artículo 8 de la Ley No. 24.156[[2]](#footnote-2); incluyendo lo referido a la implementación del Registro Central del Personal del Sector Público Nacional y del Régimen de Administración del Legajo Informatizado Único del Personal de la Administración Pública Nacional. El control de la nómina le corresponde a la Oficina Nacional de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público en el Ministerio de Modernización. A su vez, la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización es la entidad a cargo de mejorar los aspectos tecnológicos de los sistemas de información incluyendo la nómina.
   1. **Componente IV. Fortalecimiento de la transparencia financiera.** El objetivo de este componente es incrementar la efectividad del sistema financiero y reducir los costos de transacción, fortaleciendo la transparencia financiera en base a la adopción de medidas alineadas con los Estándares Internacionales del FATF/GAFI y de las NIIF, emitidas por el Consejo de NIIF. Para ello se propone, como acciones de política de la primera operación:
7. Aseguramiento de la autonomía y autarquía financiera de la UIF, mediante la emisión del Decreto 1025/2016, por parte del Poder Ejecutivo, cuyas disposiciones de rango legal establecen estas condiciones en el ámbito del Ministerio de Finanzas y asegure su adecuada financiación presupuestaria.
8. Establecimiento de nuevos procedimientos, mediante la emisión de la Resolución 135/2016 de la UIF del entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, para optimizar la gestión de los requerimientos de información con organismos extranjeros análogos a la UIF para, entre otros fines: (a) resguardar la confidencialidad de las fuentes de información cuando la misma es transmitida a órganos judiciales y/o al Ministerio Público; (b) evitar el uso indebido de la información tramitada; y (c) adecuar de manera eficiente la normativa local a los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
9. Establecimiento de criterios, mediante la emisión de la Resolución 141/2016 de la UIF del entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, para reporte de operaciones sospechosas para las entidades bancarias proporcionales a los riesgos identificados, de modo que las medidas de debida diligencia preserven la inclusión financiera, faciliten las cuentas de inversión y garanticen la integridad del sistema bancario mediante medidas regulatorias que faculten al titular de la UIF a fijar tales criterios en coordinación con otros reguladores financieros, a fin de asegurar la coherencia con las medidas adoptadas.
10. Establecimiento del modelo de Informe Especial de Auditoría Externa sobre la conciliación de activos y pasivos por aplicación de las NIIF a ser empleado por las entidades financieras sujetas a la supervisión del BCRA, mediante la Comunicación “A” 5541 del Banco Central de la República Argentina, para la convergencia del Régimen Informativo y Contable hacia las NIIF, que contempla que las entidades financieras: (a) implementen planes de convergencia hacia las NIIF; (b) difundan en los estados financieros trimestrales de 2017 la conciliación patrimonial y de resultados que permita la comparación entre el régimen vigente y aquel que resultaría de aplicar las NIIF; y (c) comiencen a partir del primero de enero de 2018 a elaborar sus estados financieros de acuerdo con las NIIF, las Resoluciones Técnicas adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y la respectiva normativa aprobada por el BCRA.
11. Emisión de los criterios, comunicados a las entidades financieras sujetas a la supervisión del BCRA mediante la Comunicación “A”’ 6114/2016 del Banco Central de la República Argentina, para que a partir del primero de enero de 2018, las entidades financieras realicen el registro de sus operaciones y, variaciones patrimoniales y elaboren los estados financieros de acuerdo con las NIIF, las circulares de adopción de la FACPCE y las respectivas normativas del BCRA.

1. **ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE IMPACTO**
   1. En la actualidad, Argentina presenta problemas en materia de capacidad institucional del Estado para el diseño e implementación de políticas públicas, lo que se refleja en distintos rankings que miden la eficiencia, efectividad y transparencia de la gestión pública. La mayoría de ellos presentan niveles de desempeño muy por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e incluso, en la mayoría de los casos, por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe (ALC).
   2. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)[[3]](#footnote-3) reporta 36 puntos para 2016, lo que representa una ligera reducción en la percepción de corrupción en el sector público argentino con respecto a 2015, con 32 puntos. Así, Argentina continúa establecida en torno al promedio de la región de ALC con 37 puntos. El IPC lo sitúa en el año 2016 en el puesto número 95 de 168 países y territorios, si bien cercano al promedio de la región, está muy lejos de los puestos ocupados por Chile (24), y Uruguay (21), el país mejor ubicado de ALC. La relación entre transparencia y corrupción es explicada con claridad por Klitgaard (1990), quien señala que la corrupción es más pronunciada en sistemas caracterizados por la preminencia de monopolio en la toma de decisiones, discreción en el uso de los recursos y falta de rendición de cuentas. En este sentido el programa plantea acciones tendientes al mejoramiento de (i) desempeño de los funcionarios públicos; (ii) gestión del gasto en obras, contrataciones y personal del Estado. En particular, los componentes 2 y 3 incluyen una serie de herramientas tendientes al fortalecimiento del acceso a la información y del marco legal de la ética de los funcionarios públicos y al fortalecimiento de la transparencia del gasto público.
   3. Los indicadores del Banco Mundial respecto a gobernanza, anticorrupción y libertad y compromiso ciudadano colocan nuevamente al país cerca del promedio de ALC y distante del promedio de la OCDE.
   4. El Índice de Control de la Corrupción[[4]](#footnote-4) refleja las percepciones de la medida en que el poder público se ejerce en beneficio privado, sea un nivel de corrupción insignificante o de gran escala, así como también refleja la "captura" del Estado por minorías selectas e intereses privados. Como se puede observar en el Gráfico 1, en el periodo de 1996 a 2014, Argentina se encuentra muy cercana al promedio de ALC y muy por debajo del promedio de países de la OCDE. Según las mediciones del Banco Mundial en 2015, en temas de manejo de corrupción, Argentina obtuvo un puntaje de -0.59, en comparación a -0,37 que es el promedio de la región de ALC y 1.33 que es promedio de los países OECD.
   5. Otro indicador a considerar es el Índice de Efectividad Gubernamental[[5]](#footnote-5) que captura la percepción de la calidad de los servicios públicos, la calidad de la administración pública y el grado de su independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación y aplicación de políticas, y la credibilidad del compromiso del gobierno con esas políticas. El Gráfico 2 muestra que Argentina está posicionada levemente por encima del promedio de los países miembros de ALC, principalmente en el periodo comprendido entre 2003 y 2007, pero de manera más cercana luego del 2011. El índice muestra un valor de -0.09 para Argentina en el año 2015, muy por debajo del promedio para OCDE (1,40) y levemente por encima del promedio que evidencia ALC (-0,26).

**Gráfico 1.**

* 1. Asimismo, la medida en que los ciudadanos de un país pueden participar en la elección de su gobierno, así como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de expresión de los medios de comunicación son captados en el Índice de Expresión de Libertad y Rendición de Cuentas (“*Voice and Accountability*”). Como se observa en el Gráfico 3, para Argentina se reportan 0.33 puntos en 2015; nuevamente con un indicador cercano, aunque por encima del promedio de los países de ALC (0.13 puntos), y muy por debajo del nivel del promedio de los países miembros de la OCDE, con 1.22. Si bien en su descripción general no parece que el programa vaya a impactar directamente sobre este indicador, en su construcción se incluyen, con ponderación positiva, variables vinculadas directamente con las políticas del programa[[6]](#footnote-6): rendición de cuentas de los funcionarios públicos, favoritismo en sus decisiones, transparencia de la política gubernamental, confiabilidad del presupuesto, de las cuentas del sector público, etc. De este modo, el será afectado por el programa a través las medidas tendientes a mejorar la disponibilidad de información, por parte de los ciudadanos, concerniente a las decisiones de funcionarios públicos a la hora de gestionar la ejecución del presupuesto y las compras del sector público.
  2. Otro indicador relevante para el análisis es el Índice de Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial[[7]](#footnote-7). Dentro de dicho índice hay indicadores de transparencia en políticas de gobierno, de ética y corrupción y de nivel de pagos irregulares y coimas, entre otros[[8]](#footnote-8).

Fuente: Elaboración propia en base al Índice Mundial de Gobernabilidad del Banco Mundial.

**Gráfico 2**

Fuente: Elaboración propia en base al Índice Mundial de Gobernabilidad del Banco Mundial

**Gráfico 3**

Fuente: Elaboración propia en base al Índice Mundial de Gobernabilidad del Banco Mundial.

* 1. El Gráfico 4 muestra que Argentina en este caso no consigue alcanzar el promedio de la región, y permanece muy lejos del promedio de los países de la OCDE[[9]](#footnote-9). El indicador de Nivel de Transparencia en Políticas del Gobierno para Argentina es de aproximadamente 3.0 en promedio para las mediciones de 2006-2007 a 2015-2016, mientras que en este último año el promedio para los países de ALC es de 3,74 y para los países OCDE corresponde a 4,75.

**Gráfico 4**

Fuente: Elaboración propia en base al Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

* 1. Adicionalmente, si bien se han dado mejoras en materia de ética y prevención de la corrupción, particularmente a partir de 2010-2011; el desempeño es bajo. El indicador de Ética y Corrupción para Argentina oscila alrededor de los 2 puntos desde las mediciones de 2006-2007 a las de 2015-2016, comparado a un promedio de 2,76 de los países de ALC y de 4,76 de los países de ingreso alto de la OCDE para el último año. Similar desempeño se reporta en el caso del Indicador de pagos Irregulares y Coimas, en que el país registra un promedio de 2,9 puntos entre 2010-2011 y 2015-2016, comparado a un indicador de 3,45 de los países de ALC y de 5,56 de los países de alto ingreso de la OCDE para última medición. Los Gráficos 5 y 6 muestran la evolución de estos dos indicadores para dicho periodo.

**Gráfico 5**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Índice de Competitividad Global del Foro Económico.

**Gráfico 6**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Foro Económico Mundial.

* 1. Siguiendo la misma tendencia, como se puede observar en el Gráfico 7, el indicador que mide el favoritismo de las decisiones de los funcionarios evidencia para Argentina promedios por debajo al correspondiente a países de ALC. La brecha es aún más amplia cuando se compara el indicador del país con el promedio de la OCDE. Para el 2015-2016, Argentina presenta un índice de 1,73, mientras que el promedio de la región asciende a 2,48 y el correspondiente a los países de la OCDE es muy superior ubicándose en 3,97.

**Gráfico 7**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Foro Económico Mundial.

* 1. Respecto a indicadores de riesgo en términos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y factores relacionados como transparencia pública y fortaleza del poder judicial, el *Basel AML Index,* reporta una medición de estos factores para Argentina que asciende a 6,74 para el año 2016, en una escala que va de 0 (riesgo bajo) a 10 (riesgo alto), mientras que para los países de ALC es de 5,88 y 4,71 para los países de la OCDE. Esto deja a la Argentina dentro del grupo de 35 países con peor indicador (en el puesto número 34 si se ordena a los países partiendo de aquel con mayor riesgo).

**Gráfico 8**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Basel de Gobernancia

* 1. El marco legal de acceso a la información en distintos países es evaluado a través del *Global Right to information rating,* que en la medición del año 2016 ubica a la Argentina en el puesto número 48, con un índice de 91 puntos sobre 150 posibles. El primer lugar es ocupado por México con 136 puntos. El índice analiza 61 indicadores divididos en 7 categorías, de las cuales en 4 Argentina tiene un enorme margen de mejora: (i) excepciones y rechazos, (ii) apelaciones, (iii) sanciones y protección, y particularmente (iv) medidas de promoción, ya que en todas obtiene 0 puntos sobre 16 posibles.
  2. Asimismo, el grado de preparación, implementación e impacto de iniciativas de Gobierno Abierto es medido por el *Open Data Barometer[[10]](#footnote-10)*. En este caso, Argentina obtiene un puntaje de 23,78 para el año 2015, comparado con el 31,43 que corresponde al promedio de ALC y con el 54,01 que corresponde con el promedio de los países de la OCDE. Incluso se registra un importante retroceso respecto al 2014, cuando el indicador fue de 35,71.

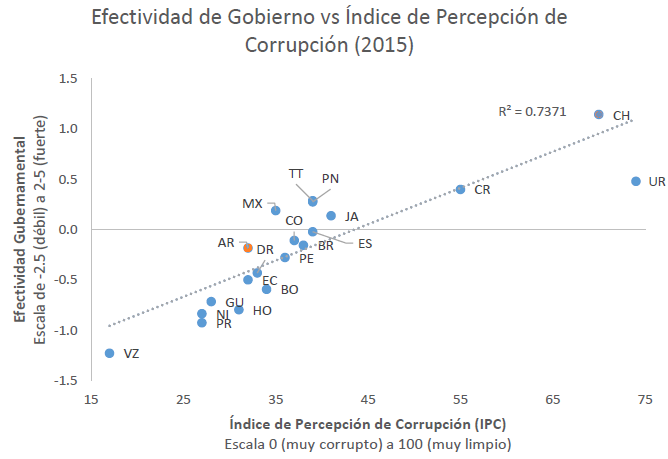
**Gráfico 9**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del *opendatabarometer.org*

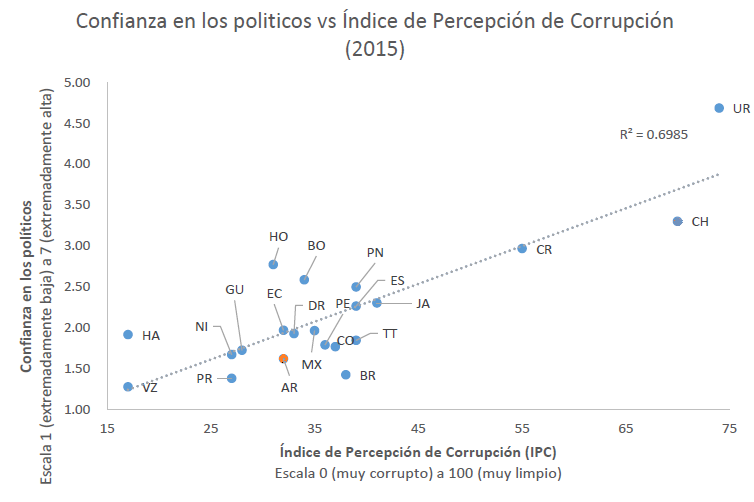
* 1. Respecto a la capacidad de adjudicación y ejecución de contratos, el *Benchmarking Public Procurement[[11]](#footnote-11)* reporta un indicador para Argentina de entre 21 y 40 puntos para el año 2016, siendo 100 el máximo posible, lo que indica la existencia de un amplio margen de mejoras para un futuro próximo.
  2. El Programa descripto en el presente informe tiene como objetivo contribuir al marco de transparencia e integridad del país, mediante regulaciones y mecanismos que promuevan el acceso a la información en las siguientes materias: (i) la adopción con rango legal del principio de acceso a la información pública y la conducta ética de los funcionarios públicos; (ii) la gestión del gasto en obras, contrataciones y personal del Estado; y (iii) la gestión del sector financiero; lo cual se origina del reconocimiento explícito de desafíos respecto al marco legal e institucional necesario para garantizar que la gestión pública sea guiada en estricto apego a principios de ética, integridad y transparencia. Como se ha explicado a través del modelo de Klitgaard, estas medidas contribuyen a un eficaz control de la corrupción.
  3. **Por consiguiente, se espera que las acciones de política de los componentes del programa evidencien, en el mediano a largo plazo, su aporte a los objetivos de este mediante la mejora de los niveles en los siguientes indicadores propuestos: (i) índice de control de la corrupción; (ii) efectividad del gobierno; (iii) nivel de libertad y compromiso de sus ciudadanos, los tres del Índice Mundial de Gobernabilidad del Banco Mundial; (iv) indicador de transparencia de las políticas del gobierno; (v) indicador de comportamiento ético de las empresas; y (vi) indicador de eficiencia del gobierno, estos últimos tres del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial; así como de los indicadores: (vii) *Basel AML Index; (viii)* *Global Right to information rating; (ix) Open Data Barometer; y (x) Benchmarking Public Procurement.***
  4. Cabe destacar que el programa se alinea con el área transversal de Instituciones y Estado de Derecho de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2010 (AB-3008), por medio del apoyo al índice de eficacia gubernamental (percentil promedio de ALC). Ante lo cual, el programa, adicionalmente, contribuiría desde el mejor desempeño a nivel país a éste, por medio del indicador de efectividad del gobierno antes anotado.

1. **ANÁLISIS DE IMPACTO**
   1. **Teniendo en cuenta la amplitud del conjunto de reformas que se desean evaluar, el análisis subsiguiente se concentra en proveer evidencia empírica del potencial impacto del programa sobre los indicadores descriptos.**
   2. A modo de introducción, se presenta una serie de gráficas que demuestran las altas correlaciones entre la corrupción (medida a través del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional) y la efectividad de gobierno (Banco Mundial), confianza en los políticos (Foro Económico Global), y el índice de desarrollo humano (Naciones Unidas), usando las últimas observaciones disponibles para los países de América Latina y el Caribe. Si bien el programa no incluye como un objetivo directo el controlar y recudir la corrupción, es indudable que mejorar la transparencia y la integridad del sector público contribuye a obtener mejores resultados en los indicadores asociados a ese problema.

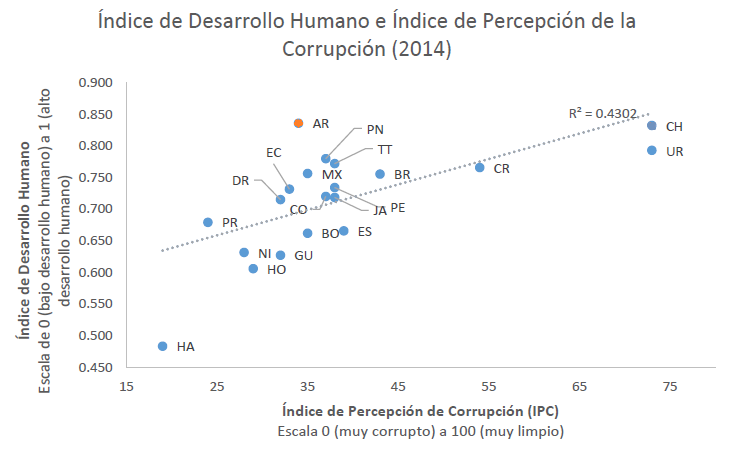
**Gráfico 8**

1. ****

**Gráfico 9**

****

**Gráfico 10**



* 1. El análisis del potencial impacto del programa se realiza en torno a **cuatro ejes clave**, los cuales mantienen una estrecha relación con las medidas de política contenidas en el préstamo AR-L1268: (i) integridad y crecimiento económico; (ii) información y democracia; (iii) prevención de corrupción y adquisiciones; y (iv) prevención de corrupción y servicio civil. Se discute tanto los efectos de la corrupción en diferentes ámbitos como una variedad de estrategias para mitigarla. El Anexo 1 presenta un resumen de la correspondencia entre las acciones de política y los ejes del análisis.

1. **Integridad y crecimiento** 
   1. El gobierno de Argentina y el presente Programa contienen una variedad de medidas que apuntan a objetivos económicos. En primer lugar, como toda intervención del BID, contiene un compromiso de mantener un ambiente macroeconómico conducente a la sostenibilidad fiscal (componente 1). Adicionalmente, la medida referida a la supervisión del BCRA sobre las operaciones y variaciones patrimoniales de las entidades financieras, entre otras, pueden tener un impacto más directo sobre la economía. Estas medidas encuentran fundamento amplio en la literatura, que contiene estudios empíricos que tratan desde la relación entre corrupción y crecimiento en general, hasta relaciones más específicas con los mercados financieros y eficiencia de firmas. En la mayoría de la literatura la variable dependiente es el crecimiento (o la eficiencia) y alguna medida de corrupción se trata como variable explicativa.
   2. Uno de los primeros estudios que relaciona indicadores de honestidad y eficiencia burocrática con crecimiento económico y que se enfoca en las consecuencias macroeconómicas negativas de la corrupción es el de Mauro (1995). El autor comienza reconociendo que no solo las instituciones afectan el desempeño económico, sino que las variables económicas pueden afectar a las instituciones. Para resolver el problema de endogeneidad originado por dicha simultaneidad utiliza como instrumento un índice que mide la probabilidad en que dos personas del mismo país elegidas al azar no pertenezcan al mismo grupo étnico-lingüístico. La evidencia le sugiere una relación negativa y significativa entre la corrupción y la inversión privada y por lo tanto, entre la corrupción y el crecimiento económico. El estudio también encuentra que una mejora en el índice de corrupción, de una desviación estándar en promedio, está asociada a un aumento de 2.7% del PIB. En el mismo sentido, Zak y Knack (1998) demuestran que hay una relación positiva entre la confianza entre personas y la inversión y el crecimiento económico. Adicionalmente, encuentran que la confianza es una función tanto del nivel de homogeneidad como la existencia de mecanismos legales y sociales que fomentan la honestidad crean consecuencias para la estafa y el engaño. Por su parte, Rothstein y Eek (2009) comprueban la relación negativa entre la corrupción y la confianza.
   3. Mo (2001) analiza los diferentes canales a través de los cuales la corrupción afecta el crecimiento económico. Encuentra que el daño que causa la corrupción a la inestabilidad política es el canal más importante, explicando el 53% del impacto en el crecimiento. Otros canales importantes son la disminución en los niveles de acumulación de capital humano y de inversión privada. Wei (2000) estudia el efecto de la corrupción sobre la inversión extranjera directa y una de sus conclusiones principales sugiere que un aumento en el nivel de corrupción en un país receptivo reduce la inversión directa extranjera recibida.
   4. En un estudio sobre la relación entre corrupción e inversión pública, Tanzi y Davoodi (1998) argumentan que niveles altos de corrupción pueden inflar el gasto en la inversión pública, lo cual puede tener un impacto positivo sobre las cifras de crecimiento general, pero resulta en costos más altos para obras y servicios públicos para la ciudadanía. A su vez, Gyimah-Brempong y Munoz de Gyimah-Brempong (2006) analizan las diferencias regionales del impacto de la corrupción y encuentran que la región en donde se observa mayor impacto distribucional es Latinoamérica, y es en África donde se observa el mayor impacto sobre crecimiento económico.
   5. En un análisis dentro del mercado financiero, Khwaja y Mian (2005) utilizan un conjunto de datos de nivel de préstamo de más de 90.000 empresas que representan el universo de préstamos corporativos en Pakistán entre 1996 y 2002 para investigar las rentas a empresas políticamente conectados con la banca. Los autores clasifican una empresa como política si su director participa en una elección y de esta manera, examinan el alcance, la naturaleza y los costos económicos de la provisión de fondos políticos. Entre algunos de sus resultados, encuentran que las empresas políticas prestan el 45 por ciento más y tienen tasas de morosidad un 50 por ciento más altas. Este trato preferencial se produce exclusivamente en los bancos del gobierno, debido a que los bancos privados no ofrecen favores políticos. Por último, estiman que los costos totales[[12]](#footnote-12) de las rentas políticas son de entre 0,3% y 1,9% del producto bruto interno anual.
   6. A nivel microeconómico, se ha asociado fuertemente a la corrupción con la ineficiencia de la firma. Dal Bo y Rossi (2007) investigan los determinantes de la ineficiencia técnica de las firmas en un modelo simple donde la corrupción produce una desviación por parte de la gerencia que se aleja de la supervisión y la coordinación necesaria en el proceso productivo eficiente. Los autores concluyen que la corrupción está fuertemente asociada con la ineficiencia al nivel de la firma en el sentido que los países más corruptos utilizan una mayor cantidad de trabajadores para producir el mismo output. Los resultados se mantienen para todas las pruebas de robustez, en las cuales se incluyeron diferentes medidas de ineficiencia y output, y cuando se instrumenta por corrupción. Tanzi y Davoodi (2000) encuentran que la corrupción está asociada con una asignación de talento a actividades poco productivas en las firmas, y que esto desemboca en una reducción del PIB de aproximadamente 0.4%, en promedio. De la Croix y Delavallade (2008) demuestran que los países en desarrollo con altos niveles de corrupción invierten más en infraestructura física que en servicios de salud y educación, argumentando que esto se explica por la mayor susceptibilidad que tienen gastos de capital a la desviación de fondos que otros tipos de gasto.
   7. A pesar de la falta de evidencia empírica del impacto de la supervisión en los mercados financieros, se puede argumentar que dicho impacto no debe ser desechado al evaluarse políticas de transparencia. En términos de experiencias en los países de la región, cabe citar que, en 2013, en la república de Chile, comenzó un periodo de desconfianza del empresariado con el caso “Cascadas”, en el cual la Superintendencia de Valores y Seguros determinó una violación reiterada a la Ley de Mercado de Valores y/o la Ley de Sociedades Anónimas en distintas operaciones que beneficiaron a un grupo de accionistas perjudicando a otros. En base a estas operaciones, la Superintendencia de Pensiones estimó una pérdida potencial de hasta 44 millones de dólares de fondos de pensiones mientras que las multas incluidas en la resolución alcanzaron un monto de 164 millones de dólares.[[13]](#footnote-13) Esto sugiere que la magnitud del impacto de la fiscalización del mercado de valores no debe ser subestimado.
2. **Transparencia y democracia**
   1. El Programa busca fortalecer la transparencia argentina a través de una serie de medidas. En primer lugar, cabe mencionar que uno de los objetivos generales del programa es contribuir al marco de transparencia e integridad del país. Adicionalmente, la operación de préstamo contiene algunas medidas específicamente dirigidas al proceso de control social, aunque no de manera directa mediante la capacitación de ciudadanos o su incorporación a roles de control, se implementan mecanismos para que la información vinculada a decisiones de funcionarios (principalmente en relación a la ejecución del presupuesto y compras del estado) esté a al alcance de cualquier integrante de la sociedad civil , por ejemplo: (i) incorporación al marco legal argentino de un régimen de acceso a la información pública que alcance a, entre otros, la totalidad de los Poderes del Estado Nacional y establezca entes/órganos garantes autónomos que velen por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y promuevan medidas de transparencia activa; (ii) adopción de un plan de apertura de datos gubernamentales en la administración pública nacional, instruyendo a los Ministerios, Secretarías y organismos desconcentrados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, sobre la preparación de dichos planes y disponiendo la actualización del Portal Nacional de Datos Públicos; (iii) introducción en el ordenamiento penal argentino de la figura del “imputado arrepentido”, para mejorar la probabilidad de acceder a información sobre delitos contra la administración pública; y con ello contribuir a la reducción de las escalas penales, en tanto contribuyan a un significativo avance en la investigación, o permitan dar con autores o coautores del delito; y (iv) Fortalecimiento de la capacidad de registro de los obsequios a funcionarios públicos, reglamentando el régimen de obsequios previsto en la Ley de Ética Pública; de tal forma que los funcionarios puedan reportar debidamente estas situaciones y la Oficina Anticorrupción pueda realizar un adecuado control y seguimiento del destino de estos obsequios, así como evitar su ilegal incorporación al patrimonio de los funcionarios.
   2. La literatura relacionada se concentra principalmente en la relación entre la corrupción con la democracia, siendo la primera una amenaza para la segunda[[14]](#footnote-14). A estas conclusiones arriban diversos trabajos empíricos que miden la corrupción a través de índices de percepción de la corrupción.[[15]](#footnote-15) Por ejemplo, Treisman (2000) encuentra que una larga experiencia con la democracia en general reduce la incidencia de la corrupción y Shen y Williamson (2005) demuestran que la democracia (medida en términos de indicadores de derechos políticos, libertades civiles, y libertad de prensa) tiene un impacto positivo sobre la percepción de la corrupción. Otro trabajo en esta línea de investigación es el de Seligson (2006) que propone una medida de la corrupción dada por la experiencia individual obtenida de una encuesta pública de opinión sobre comportamientos y valores democráticos realizada en 6 países latinoamericanos. El autor concluye que la corrupción desgata la legitimidad de las democracias debilitando la confianza de los ciudadanos en sus propios regímenes y socavando la confianza interpersonal que afecta las relaciones de la sociedad civil.
   3. Otro aspecto a considerar a la hora de evaluar las políticas de anticorrupción es el impacto de mayores o menores niveles de competencia en un sistema político democrático. Ante una falta de competencia, se aumenta la posibilidad de dinastías políticas. Estas pueden afectar la legitimidad de la democracia y la calidad de las políticas de gobierno[[16]](#footnote-16) debido a que tienen incentivos para implementar políticas que incrementen sus ventajas y garanticen la permanencia en el poder, lo cual potencia la aparición de clientelismo político y corrupción en países institucionalmente débiles. Utilizando un modelo de regresión discontinua para datos de municipalidades de Brasil, Bragança et al. (2015) buscan determinar cómo las dinastías políticas de los intendentes afectan la calidad del gobierno local. Encuentran evidencia a favor de un mayor gasto de recursos, especialmente orientados a inversiones en infraestructura urbana, salud y sanidad. Sin embargo, dicho aumento del gasto no está asociado a una mejora en el crecimiento y el empleo ni a una mejora en la calidad de la infraestructura urbana o en los servicios de salud y educación públicas. En la misma línea, Geys (2015) encuentra que las dinastías políticas tienen un efecto significativo sobre el capital humano de los políticos relacionado con menores niveles de educación cuando el proceso de selección de funcionarios está controlado por funcionarios actualmente en el poder y que las diferencias en los niveles educativos se profundizan cuando las restricciones en dicho proceso disminuyen.
3. **Prevención de corrupción, adquisiciones y contrataciones**
   1. Finalmente, el Programa busca seguir fortaleciendo la institucionalidad de las compras y contrataciones públicas. Por ejemplo, una medida de política del programa refiere a la implementación del sistema de gestión electrónica para las contrataciones de obra pública, concesiones de obra pública y servicios públicos y licencias (CONTRAT.AR), como mecanismos que doten al Estado de mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los contratos de obra pública y concesión de obra y servicios públicos. Existe una literatura que apoyo esta clase de medidas, en la cual se demuestra que la existencia de corrupción en los organismos públicos en muchos casos implica un sobreprecio en las compras realizadas por dichas instituciones y baja calidad de los bienes o servicios obtenidos.
   2. Por un lado, en Bandiera et al. (2009) se hace un esfuerzo para diferenciar los problemas de ineficiencia derivados de la gestión pública de los problemas generados por la corrupción. Los autores explotan un experimento natural que surge de una política asociada a una central de compras de la administración pública italiana y analizan las compras de bienes estandarizados realizadas por los organismos públicos. Para lograr la diferenciación entre ineficiencia y corrupción proponen una distinción entre despilfarro activo, cuando hay implicado un beneficio directo o indirecto para el tomador de decisión del estado (por ejemplo, los sobreprecios pagados a cambio de un soborno), y despilfarro pasivo (también entendido como la ineficiencia), cuando no hay implicado ningún beneficio para éste (por ejemplo, cuando los funcionarios no poseen habilidades para minimizar costos o no tienen incentivos para minimizarlos o cuando debido a regulación estatal excesiva la adquisición se entorpece e incrementa los precios promedios de lo que pagan los organismos públicos). Las tres conclusiones principales de este trabajo son que: (i) algunos organismos pagan un precio sistemáticamente superior a otros por el mismo bien, (ii) dichas diferencias de precios están correlacionadas con la estructura de gobierno y (iii) los sobreprecios están asociados principalmente al despilfarro pasivo, que representa un 83% del despilfarro total estimado. Adicionalmente, la evidencia sugiere que el despilfarro activo puede implicar un sobreprecio del 11% en las compras de bienes. Concluyen con el hallazgo de que los organismos públicos italianos que realizaron sus compras a través de la agencia central de compras lograron un ahorro del 22% del precio de compra en comparación con aquellos entes descentralizados que no utilizaron la agencia central.
   3. Por el otro lado, y en concordancia con estos resultados, Di Tella y Schargrodsky (2003) explotan un evento único de control de la corrupción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) luego de un cambio de gobierno y estiman que los funcionarios públicos de los hospitales de dicha ciudad pagaban un sobreprecio de 10% aproximadamente antes de la implementación de la política de anticorrupción. En consecuencia, argumentan que las políticas de anticorrupción podrían ser rentables incluso para costos de implementación de auditorías de compra altos.
   4. Lewis-Faupel et al, en un estudio que examina los contextos de Indonesia e India, encuentran una serie de impactos de sistemas de adquisiciones electrónicas (*e-procurement*). En general, encuentran que los sistemas no llevan a una reducción de precios pagados por los gobiernos. Sin embargo, sí descubren que la implementación del sistema llevó a una mejor calidad de carreteras (en India) y menos rezagos en la ejecución de obras (en Indonesia). Una distribución más amplia de ganadores de contratos, y la participación de firmas de mayor calidad, parece explicar estas mejoras observadas.
   5. En un estudio sobre Chile, Singer et al (2009) documentan el potencial de producir ahorros del sistema de compras electrónicas, ChileCompra. Encuentran que en el 2007, 885 entidades del estado chileno utilizaron el sistema para comprar aproximadamente USD $4.5 mil millones en bienes y servicios. Estiman que ChileCompra produjo una reducción de precios de 2.93% (USD $91.8 millones) en el 2006 y 3.03% (USD $118.1 millones) con respecto a lo que hubiera pagado el estado en ausencia del sistema. Adicionalmente, reportan un ahorro de gastos administrativos (calculado en términos de la relación entre el presupuesto del departamento encargado de ChileCompra y el volumen de transacciones) de un 0.28% (USD $9.7 millones) en el 2006 y 0.38% (USD $ 16.9 millones) en el 2007. El mecanismo principal a través del cual se logra la reducción de precio es el aumento en el número de oferentes en los procesos licitatorios. La experiencia del caso chileno puede dar buenos indicios acerca de los potenciales beneficios de la implementación en Argentina del sistema de gestión electrónica para las contrataciones de obra pública, concesiones de obra pública y servicios públicos y licencias (CONTRAT.AR).
   6. Las medidas respecto a contrataciones del sector público, por ejemplo, la mejora del control y la transparencia en la gestión de la nómina de personal, disponibilizando la implementación de un único sistema integral de gestión y administración del personal (Sistema de Administración de Recursos Humanos – SARHA), encuentran gran resonancia con la literatura existente, que se concentra en dos principales aspectos que vinculan el servicio civil y la integridad: la meritocracia y los salarios. Dahlstrom, Lapuente y Teorell (2012), utilizando un panel de 52 países, analizan la relación entre aspectos de la función pública y la incidencia de la corrupción. Llegan a la conclusión que, si bien hay una relación fuerte entre factores burocráticos y la corrupción, no todos los factores tienen el mismo nivel de influencia. En particular, es la selección y promoción con base en mérito que más influye, por encima de salarios competitivos, estabilidad de carrera. La meritocracia ha sido demostrada a tener otros impactos positivos, como en el crecimiento económico de largo plazo (Evans y Rausch, 1999) y la reducción de la pobreza (Henderson et al, 2003). Dolan (2002), estudiando agencias del gobierno federal de Estados Unidos, encuentra de directivos públicos seleccionados con base en mérito (del Senior Executive Service) tienden a minimizar los gastos públicos, lo cual contradice la teoría predominante (Naskanen, 1971) que los burócratas maximizan el gasto de su presupuesto para lograr beneficios personales.
   7. Al mismo tiempo, varios autores demuestran la importancia de los salarios de los funcionarios públicos. El sustento teórico para esta línea de investigación viene de Becker y Stigler (1974), quienes argumentaron que los agentes bajo supervisión tenderían a ser menos corruptos si se les paga salarios altos. Utilizando un indicador de salarios del sector publico basado en datos macroeconómicos[[17]](#footnote-17), Van Rijckeghem y Weder (1997) proveen evidencia empírica de la relación negativa entre corrupción y salarios de los empleados públicos entre países, pero no dentro de los mismos a través del tiempo. Los resultados sugieren que un aumento relativo en el pago de 1 a 2 está asociado con una mejora de alrededor de 1 punto en el índice de corrupción. Le et al. (2013) llegan a resultados similares con un indicador de salarios basados en datos microeconómicos. Por último, muchos autores llegan a la conclusión de que, a pesar que la relación negativa entre corrupción y salarios de los empleados públicos entre países existe, dada la estructura del sector, reducir la corrupción únicamente mejorando los salarios es altamente costoso[[18]](#footnote-18). Acorde a este argumento, Le et al. (2013) sugiere que el rol de los salarios del gobierno en la reducción de la corrupción disminuye a medida que los países se vuelven más ricos, debido a que las rentas que se pueden extraer son mayores dados los salarios que superan los salarios de subsistencia.
   8. Ahora bien, se puede sugerir que salarios más altos pueden aumentar la calidad de los funcionarios porque se genera la competencia necesaria para aumentar los incentivos de aquellos que tienen mayores habilidades o capacidades para desempeñarse en un cargo.[[19]](#footnote-19) En este sentido, Dal Bó, Finan y Rossi (2013) estudian una campaña de reclutamiento para cubrir puestos del sector público en México en la que los salarios fueron anunciados al azar a través de los sitios de reclutamiento y las ofertas de trabajo fueron aleatorizadas posteriormente. Las pruebas sugieren que efectivamente los salarios más altos atraen candidatos más capaces pero el resultado más interesante es que no hallan evidencia de la existencia de efectos de selección adversa sobre la motivación[[20]](#footnote-20). Estos resultados implican que los salarios más altos cambian la estructura de incentivos del agente logrando atraer a agentes calificados y motivados al sector público. Adicionalmente, encuentran que las tasas de aceptación de la oferta laboral aumentan con una oferta de salarios más alta. Otro resultado interesante a la que arriban los autores es que los salarios más altos ayudan a compensar las menores tasas de aceptación debidas a características negativas de la oferta laboral tales como la distancia o como el malo entorno municipal. Finalmente, una mejora en la calidad de empleados públicos podría generar una mayor eficiencia en el sector asociada ésta a un aumento en la cantidad y calidad del output producido.
4. **CONCLUSIÓN GENERAL**
   1. La evidencia acerca de los impactos que tienen medidas tendientes a mejorar la transparencia y la integridad, como mecanismos que abonan a la prevención y control de la corrupción, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, es abundante. El estudio indica que una mayor corrupción está asociada a (i) menores tasas de crecimiento, a causa de la inestabilidad política, una disminución de inversión privada, y la ineficiencia al nivel de la firma; y (ii) el desgate de la legitimidad de las democracias a causa del debilitamiento de la confianza de los ciudadanos con sus regímenes gubernamentales y la disminución de la confianza interpersonal, también a través de un efecto negativo sobre la participación electoral. Se ha demostrado que una variedad de soluciones, íntimamente relacionadas a las medidas apoyadas por el programa, funcionan para controlar la corrupción y traen consigo externalidades positivas, incluyendo: (i) reformas compras públicas, como la gestión centralizada apoyada por sistemas electrónicos y las auditorías pueden llevar a una reducción de sobrecostos en las compras y mayor calidad en los bienes y servicios adquiridos; y (ii) reformas de profesionalización del servicio, en particular lo referido al fortalecimiento de la meritocracia, pueden limitar la corrupción, fomentar el crecimiento económico de largo plazo y contribuir a reducir la pobreza.

**Anexo 1: Ejes del Análisis Económico y**

**Acciones de Política Asociadas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eje del Análisis Económico** | **Acciones de Política Asociadas** |
| Integridad y crecimiento | Todas las medidas en su conjunto  Fortalecimiento de la transparencia financiera a partir de un mejor uso de información por parte de la UIF y el B.C.R.A en seguimiento de los estándares internacionales del GAFI y de información financiera emitidas por el Consejo de NIIF |
| Transparencia y democracia | (i) incorporación al marco legal argentino de un régimen de acceso a la información pública que alcance a, entre otros, la totalidad de los Poderes del Estado Nacional y establezca entes/órganos garantes autónomos que velen por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y promuevan medidas de transparencia activa; (ii) adopción de un plan de apertura de datos gubernamentales en la administración pública nacional, instruyendo a los Ministerios, Secretarías y organismos desconcentrados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, sobre la preparación de dichos planes y disponiendo la actualización del Portal Nacional de Datos Públicos; (iii) introducción en el ordenamiento penal argentino de la figura del “imputado arrepentido”, para mejorar la probabilidad de acceder a información sobre delitos contra la administración pública; y con ello contribuir a la reducción de las escalas penales, en tanto contribuyan a un significativo avance en la investigación, o permitan dar con autores o coautores del delito; y (iv) Fortalecimiento de la capacidad de registro de los obsequios a funcionarios públicos, reglamentando el régimen de obsequios previsto en la Ley de Ética Pública; de tal forma que los funcionarios puedan reportar debidamente estas situaciones y la Oficina Anticorrupción pueda realizar un adecuado control y seguimiento del destino de estos obsequios, así como evitar su ilegal incorporación al patrimonio de los funcionarios. |
| Prevención de corrupción, adquisiciones y contrataciones | (i)Aprobación de la implementación del sistema de gestión electrónica para las contrataciones de obra pública, concesiones de obra pública y servicios públicos y licencias (CONTRAT.AR), como mecanismos que dote al Estado de mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los contratos de obra pública y concesión de obra y servicios públicos.  (ii)Mejora del control y la transparencia en la gestión de la nómina de personal, disponibilizando la implementación de un único sistema integral de gestión y administración del personal (Sistema de Administración de Recursos Humanos - SARHA) que preste servicios en las entidades y jurisdicciones comprendidas en el inciso a) del Artículo 8 de la Ley No. 24.156[[21]](#footnote-21); incluyendo lo referido a la implementación del Registro Central del Personal del Sector Público Nacional y del Régimen de Administración del Legajo Informatizado Único del Personal de la Administración Pública Nacional.  (iii)Facilitar y agilizar la interacción entre el Estado Nacional y los usuarios del sistema de contrataciones, dotando de mayor desarrollo tecnológico al régimen de contrataciones; y facilitando el acceso a la información. Esto de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 8 de la Ley No. 24.156, para las entidades del Poder Ejecutivo Nacional, en cuanto a desarrollos tecnológicos en todo lo inherente al régimen de compras; especialmente en cuanto a la presentación de ofertas y al registro de Proveedores. |

**Referencias**

Ajzen, Icek (2001). "Nature and operation of attitudes." Annual review of psychology 52.1: 27-58.

Anderson, C. J., and Tverdova, Y. V. (2003): Corruption, political allegiances, and attitudes toward government in contemporary democracies. American Journal of Political Science, 47(1), 91–109.

Assiotis, Andreas, and Kevin Sylwester (2010). "Do the effects of corruption upon growth differ across political regimes?.". Southern Illinois University Carbondale Discussion Paper.

Bandiera, O., Prat, A. and Valletti, T. (2009): Active and Passive Waste in Government Spending: Evidence from a Policy Experiment. American Economic Review, 99, 1278- 1308.

Bardhan, P. (2006): The economist's approach to the problem of corruption. World Development 34, 341-348.

Bayer, P., Ross, S.L. and Topa, G. (2008): Place of work and place of residence: Informal hiring networks and labor market outcomes. Journal of Political Economy 116: 1150-1196.

Becker, G., & Stigler, G. (1974): Law Enforcement, Malfeasance and the Compensation of Enforcers. Journal of Legal Studies 3, 1–18.

Bennedsen, M., Nielsen, K., Perez-Gonzalez, F., and Wolfenzon D. (2007): Inside the family firm: The role of families in succession decisions and performance. Quarterly Journal of Economics 122(2): 647-691.

Bertrand M. and Schoar, A. (2006): The role of family in family firms. Journal of Economic Perspectives 20: 73-96.

Besley, T. and Mclaren, J. (1993): Taxes and bribery: The role of wage incentives. Economic Journal103, 119-141.

Bragança, A., Ferraz, C. and Rios, J. (2015): Political Dynasties and the Quality of Government. Working Paper.

Burguet, Roberto, and Yeon-Koo Che. "Competitive procurement with corruption." RAND Journal of Economics (2004): 50-68.

Carpini, Michael X. Delli, and Scott Keeter. What Americans know about politics and why it matters. Yale University Press, 1997.

Compte, Olivier, Ariane Lambert-Mogiliansky, and Thierry Verdier. "Corruption and competition in procurement auctions." Rand Journal of Economics (2005): 1-15.

Dal Bó, E., Dal Bó, P. & Snyder, J. (2009): Political dynasties. Review of Economic Studies 76(1): 115-142.

Dal Bó, E., Finan, F. and Rossi, M. (2013): Strengthening State Capabilities: The Role of Financial Incentives in the Call to Public Service. Quarterly Journal of Economics, Oxford University Press, vol. 128(3), pages 1169-1218

Dahlström, Carl, Victor Lapuente, and Jan Teorell. "The merit of meritocratization: Politics, bureaucracy, and the institutional deterrents of corruption." Political Research Quarterly (2011): 1065912911408109.

De la Croix, David, and Clara Delavallade. "Growth, public investment and corruption with failing institutions." Economics of Governance 10.3 (2009): 187-219.

Della Porta, D. (2000): Social capital, beliefs in government, and political corruption. In S. J. Pharr & R. D. Putnam (Eds.), Disaffected democracies: What’s troubling the trilateral countries? (pp. 202–228). Princeton: Princeton University Press.

Della Porta, D., and Mény, Y. (1996): Democracy and corruption in Europe. London: Pinter.

Di Tella, R. and Schargrodsky, E. (2003): The Role of Wages and Auditing during a Crackdown on Corruption in the City of Buenos Aires. Journal of Law and Economics, University of Chicago Press, vol. 46(1), pages 269-92, April.

Dolan, Julie. "The Budget‐Minimizing Bureaucrat? Empirical Evidence from the Senior Executive Service." Public Administration Review 62.1 (2002): 42-50.

Dustmann, C., Glitz A., Schönberg, U. and Brücker, H. (2015): Referral-based job search networks. Review of Economic Studies.

Feinberg, G (2009): The epidemic of petit corruption in contemporary Cambodia: Causes, consequences and solutions”. Crime Prevention and Community Safety 11, 277-296.

Ferraz, Claudio, and Frederico Finan. "Exposing corrupt politicians: the effects of Brazil's publicly released audits on electoral outcomes." (2007).

Fishbein, Martin, Icek Ajzen, and Ron Hinkle. "Predicting and understanding voting in American elections: Effects of external variables." Understanding attitudes and predicting social behavior (1980): 173-195.

Gagliarducci, S. & Manacorda, M. (2014): Politics in the family: Nepotism and the hiring decision of Italian firms. Tor Vergata University, mimeo.

Geys, B. (2015): Political Dynasties, Electoral Institutions and Politicians’ Human Capital. Working Paper, Norwegian Business School BI, Department of Economics.

Gingerich, D. (2004): On unstable ground: Parties, patronage and political corruption in contemporary Bolivia. Paper presented at the Meeting of the American Political Science Association, Chicago.

Golden, M., and Chang, E. (2004): Does corruption pay? The survival of politicians charged with malfeasance in the Postwar Italian chamber of deputies. Paper presented at the American Political Science Association, Chicago, IL.

Gyimah-Brempong, Kwabena, and Samaria Munoz de Gyimah-Brempong (2006). "Corruption, growth, and income distribution: Are there regional differences?." Economics of Governance 7.3: 245-269.

Henderson, Jeffrey, et al. "Bureaucratic effects:'weberian'state structures and poverty reduction." (2003).

Heidenheimer, A. J., Johnston, M. & LeVine, V. T. (1989): Political corruption: A user’s manual. New Brunswick: Transaction.

Huntington, S. P. (1968): Political order in changing societies. New Haven: Yale University Press.

Kahne, Joseph E., and Susan E. Sporte. "Developing citizens: The impact of civic learning opportunities on students’ commitment to civic participation." American Educational Research Journal 45.3 (2008): 738-766.

Khwaja A. and Mian, A. (2005): Do lenders favor politically connected firms? Rent provision in an emerging financial market. Quarterly Journal of Economics 120:1371–411.

Klitgaard, R. (1990): Controlando la corrupción. Editorial Quipus.

Kramarz F. & Skans, O.N. (2014): When strong ties are strong: Networks and youth labor market entry. Review of Economic Studies 81(3): 1164-1200.

Le, V. H., de Haan, J. and Dietzenbacher, E. (2013): Do higher government wages reduce corruption? Evidence from a novel dataset. CESifo Working Paper No. 4254.

Lengwiler, Yvan, and Elmar Wolfstetter (2006). "Corruption in procurement auctions." Available at SSRN 874705.

Lewis-Faupel, Sean, et al. (2014). Can electronic procurement improve infrastructure provision? evidence from public works in india and indonesia. No. w20344. National Bureau of Economic Research.

Macchiavello, R. (2008): Public sector motivation and development failures. Journal of Development Economics 86, 201-213.

Mauro, P. (1995): "Corruption and Growth". Quarterly Journal of Economics, CX, 681–712.

Méndez, Fabio, and Facundo Sepúlveda (2006). "Corruption, growth and political regimes: cross country evidence." European Journal of Political Economy 22.1: 82-98.

Mishler, W. & Rose, R. (2001): What are the origins of political trust? Testing institutional and cultural theories in post-communist societies. Comparative Political Studies, 34(1), 30–62.

Mo, Pak Hung (2001). "Corruption and economic growth." Journal of comparative economics 29.1: 66-79.

Niskanen, William A. (1975). "Bureaucrats and politicians." The Journal of Law & Economics 18.3: 617-643.

Oesterle, Sabrina, Monica Kirkpatrick Johnson, and Jeylan T. Mortimer (2004). "Volunteerism during the transition to adulthood: A life course perspective."Social Forces 82.3: 1123-1149.

Pharr, S. J. (2000): Officials’ misconduct and public distrust: Japan and the trilateral democracies. In S. J. Pharr & R. D. Putnam (Eds.), Disaffected democracies: What’s troubling the trilateral countries? (pp. 174–201). Princeton: Princeton University Press.

Perez-Gonzalez, F. (2006): Inherited control and firm performance. American Economic Review 96(5): 1559-1588.

Querubin, P. (2013): Families and politics: Dynastic incumbency advantage in the Philippines. New York University, mimeo.

Rose-Ackerman, S. (1999): Corruption and government: Causes, consequences, and reform. Cambridge: Cambridge University Press.

Rose-Ackerman, S. (2004): Corruption. The Encyclopedia of Public Choice in Charles K Rowley and Friedrich Schneider (eds.), Kluwer Academic Publishers, 67-76.

Rossi, M. A. (2015): Self-perpetuation of political power: Evidence from a natural experiment in Argentina. Economic Journal, forthcoming.

Rothstein, Bo, and Daniel Eek (2009). "Political corruption and social trust an experimental approach." Rationality and Society 21.1: 81-112.

Seligson, M. A. (2006): The Measurement and Impact of Corruption Victimization: Survey Evidence from Latin America. World Development Vol. 34, No. 2, pp. 381–404.

Shen, Ce, and John B. Williamson. "Corruption, Democracy, Economic Freedom, and State Strength A Cross-national Analysis." International Journal of Comparative Sociology 46.4 (2005): 327-345.

Singer, Marcos, et al. "Does e-procurement save the state money?." Journal of Public procurement 9.1 (2009): 58.

Tanzi, Vito, and Hamid Davoodi (1998). Corruption, public investment, and growth. Springer Japan.

Tanzi, Vito, and Hamid R. Davoodi. "Corruption, growth, and public finances." (2000): 1-27.

Treisman, Daniel. "The causes of corruption: a cross-national study." Journal of public economics 76.3 (2000): 399-457.

Treisman, D. (2007): What have we learned about the causes of corruption from ten years of cross-national empirical research? Annual Review of Political Science 10, 211-244.

Ul Haque, N. and Sahay, R. (1996): Do government wage cuts close budget deficits? Costs of corruption. IMF Staff Papers 43, 754-778.

Van Rijckeghem, C. and Weder, B. (1997): Corruption and the Rate of Temptation: Do Low Wages in the Civil Services Cause Corruption? IFM Working Paper.

Van Rijckeghem, C. & Weder, B. (2001): Bureaucratic Corruption and the Rate of Temptation: Do Wages in the Civil Service Affect Corruption, and by How Much? Journal of Development Economics 65, 307–31.

Van Rijckeghem, C. & Weder, B. (2001): Bureaucratic corruption and the rate of temptation: Do wages in the civil service affect corruption, and by how much? Journal of Development Economics 65, 307-331.

Villalonga, B. and Amit, R. (2006). How do family ownership, control and management affect firm value? Journal of Financial Economics, 80 (2), 385-417.

Wei, S-J. (2000): How Taxing is Corruption on International Investors? Review of Economics and Statistics, February 2000, 82(1): 1-11.

Zak, P. J., and S. Knack. "Trust and Growth (IRIS, University of Maryland, mimeo)." (1998).

1. El estudio fue elaborado por el consultor Martin Rossi, como parte de los Enlaces Opcionales del programático I del Programa objeto del presente Análisis Económico. El mismo cuenta con los comentarios del equipo de proyecto. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Corruption Perecption Index Report 2015 y 2016*, *Transparency International (TI)*. La escala de puntaje del IPC es de 0 a 100, 0 = muy corrupto y 100= muy limpio. [↑](#footnote-ref-3)
4. Índice Mundial de Gobernabilidad del Banco Mundial.

   Ver: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home>. La escala del Índice de Control de la Corrupción, de Efectividad Gubernamental, y de Libertad y Compromiso de sus Ciudadanos (“*Voice and Accountability*”), que se citan en este documento, es de -2.5 (débil) a 2.5 (fuerte). El promedio de ALC incluye los siguientes países miembros prestatarios del BID: Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay; - Costa Rica, El Salvador, Honduras, República Dominicana, México, Nicaragua, Panamá, Belice, Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela; Bahamas, Guyana, Barbados, Surinam, Jamaica, Trinidad & Tobago y Haití. El promedio de los países miembros de la OCDE incluye los siguientes 34 países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Turquía. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ídem. [↑](#footnote-ref-5)
6. http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/va.pdf [↑](#footnote-ref-6)
7. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/ [↑](#footnote-ref-7)
8. Estos indicadores se pondera en escala de 1 a 7, siendo 7 el mejor. [↑](#footnote-ref-8)
9. Incluye países miembros de la OCDE de alto ingreso como son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza. [↑](#footnote-ref-9)
10. Este indicador se pondera en escala de 0 a 100, siendo 100 el máximo dentro del número de países clasificados. [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://bpp.worldbank.org/~/media/WBG/BPP/Documents/Reports/Benchmarking-Public-Procurement-2016.pdf?la=en>. No se han realizado mediciones para la Argentina en años anteriores. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dentro de los costos totales se consideran aquellos generados por la morosidad de los préstamos a los políticos y aquellos asociados a que este dinero se invierte mal o no se invierte. [↑](#footnote-ref-12)
13. ### Tjark Marten Egenhoff, Reportaje Internacional, 9 de marzo de 2015, Fundación Konrad Adenauer, Chile.

    [↑](#footnote-ref-13)
14. Della Porta (2000), Della Porta y Mény (1996), Gingerich (2004), Pharr (2000), Golden y Chang (2004), Huntington (1968), Heidenheimer et al. (1989) y Rose-Ackerman (1999). [↑](#footnote-ref-14)
15. Mishler y Rose (2001) y Anderson y Tverdova (2003). [↑](#footnote-ref-15)
16. Bragança et al. (2015). [↑](#footnote-ref-16)
17. El indicador que utilizan los autores es el ratio entre salarios del sector público y salarios del sector manufacturero. [↑](#footnote-ref-17)
18. Besley y McLaren (1993), Van Rijckeghem y Weder (2001) y Macchiavello (2008). [↑](#footnote-ref-18)
19. Ul Haque y Sahay (1996) y Dal Bó, Finan y Rossi (2013). [↑](#footnote-ref-19)
20. La capacidad es una medida del coeficiente intelectual, la personalidad y la proclividad hacia el trabajo del sector público mientras que la motivación es una medida de la integridad, las inclinaciones pro-sociales y la motivación por el servicio público. [↑](#footnote-ref-20)
21. LEY N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional [↑](#footnote-ref-21)